

EL CIUDADANO Y LA COMUNIDAD POLITICA

COLECCION
ATENEOSACERDOTALDEGUADALAJARA No. 6

JAVIER HERVADA

*El Ciudadano
y la
Comunidad Política*



EDITORIA DE REVISTAS, S.A. DE C.V.
MEXICO, 1990

Primera edición: 1990

NIHIL OBSTAT:

Dr. Bernardo Fernández A., Pbro.

Censor Eclesiástico

13 de julio de 1989.

IMPRIMATUR:

Mons. Rutilio S. Ramos Rico

Pro-Vicario General

24 de agosto de 1989.

Diseño de Portada: Ma. del Carmen Ventura

Coedición con:

Ateneo Sacerdotal de Guadalajara

Lago de Ginebra No. 2670-5

Lagos del Country

Apartado postal 32-307

Teléfono: 33-78-82

44210, Guadalajara, Jalisco (México).

DERECHOS RESERVADOS

© 1990 Javier Hervada

© 1990 Editora de Revistas, S.A. de C.V.

Juan Tinoco 10-B

03930 México, D.F.

Col. Merced Gómez

Teléfonos: 680-4696/651-8446/593-1821

660-5775/660-5715

Fax: 660-5436

ISBN 968-428-302-4

Impreso en México

Printed in Mexico

SUMARIO

<i>SUMARIO</i>	<i>5</i>
<i>PROLOGO</i>	<i>7</i>
<i>I. PRINCIPIOS GENERALES</i>	<i>11</i>
<i>II. DERECHOS POLITICOS</i>	<i>15</i>
<i>III. DEBERES CIVICOS</i>	<i>19</i>
<i>IV. LEGITIMIDAD E ILEGITIMIDAD DE LA AUTORIDAD POLITICA</i>	<i>23</i>
<i>V. LA VIOLENCIA POLITICA</i>	<i>27</i>
<i>VI. ALGUNOS TEXTOS DEL MAGISTERIO ECLESIASTICO</i>	<i>33</i>

PROLOGO

La inveterada contraposición individuo-Estado, además de ser un problema teórico con implicaciones jurídicas y conceptuales, la respuesta que se le de en la práctica resulta definitiva para la organización social y la realización personal de los individuos dentro de la comunidad.

Ciertamente, la concepción política de los gobiernos ha dividido no sólo la opinión de los ciudadanos, sino a naciones enteras en bloques antagónicos de poder, cuyas diferencias han pretendido incluso resolverse con el recurso a las armas generando de esta manera conflictos bélicos de gran magnitud.

Pero, ¿Cuál debe ser finalmente la función del Estado? ¿Qué papel debe desempeñar el individuo dentro de la comunidad? ¿En qué medida se identifican el Bien Común y el bien personal? ¿Qué implicaciones éticas tiene esta relación? ¿Qué relación existe entre el Derecho Natural y el Derecho Jurídico? ¿Es

la libertad del individuo el fundamento del deber cívico?.

Indudablemente, la realización del hombre se encuentra ínsita dentro de su vida comunitaria, dentro de la cual este realiza sus actividades, alcanza sus fines temporales y ayuda a otros a desarrollarse.

Es, en consecuencia, de gran importancia resolver dicho antagonismo de manera tal que se pueda lograr armonizar la vida de los individuos dentro de la comunidad, garantizar el logro de sus fines y contribuir de este modo, dentro de un ámbito de libertad, al desarrollo de toda la comunidad en su conjunto.

Por esta razón es imprescindible partir de principios permanentes y universales, basados en la verdadera esencia de la naturaleza humana. Para ello no existe nada más objetivo que la doctrina social de la Iglesia, quien con las enseñanzas de su Magisterio orienta y perfila los verdaderos fines, proporciona las auténticas bases de la organización social, así como los legítimos fundamentos de la organización jurídica de la comunidad y del significado de la vida social del hombre.

En esta obra, el autor nos presenta un desarrollo breve y sistemático de los principales conceptos socio-políticos, fincados en los principios del Derecho Natural y sostenidos por la autoridad del Magisterio de la Iglesia entorno a temas tales como: la autoridad

civil; los derechos y deberes cívicos; la violencia política y social; la coparticipación individuo-Estado en la realización del Bien Común, etc. Además nos presenta una selección de textos tomados de varias encíclicas papales en donde se exponen pronunciamientos profundos sobre estos temas.

I. PRINCIPIOS GENERALES

La sociabilidad natural del hombre ha ido dando lugar, a lo largo de la historia, a diferentes formas de sociedad. Vamos a considerar aquí la *comunidad política*, o sociedad soberana e independiente. La pluralidad de comunidades políticas o Estados obedece a factores históricos, pero en cualquier caso la organización, el poder y las leyes de cada Estado han de acomodarse a la ley natural.

La persona humana, al estar unida a otras en una comunidad política, tiene en ella una posición fundamental, de la que dimanar unos derechos y unos deberes: *los derechos políticos y los deberes cívicos*. Tanto los derechos como los deberes se fundan en que esa posición fundamental es activa. El hombre no es simple súbdito o sujeto pasivo de los poderes estatales; es socio o miembro activo de la comunidad política y, por lo tanto, corresponsable del bien común.

*La condición de ciudadano se sustenta en tres principios: el principio de igualdad, el principio de diversidad de funciones y el principio de autoridad. Por el principio de igualdad, todos los ciudadanos son responsables del bien común y, en consecuencia, son iguales ante la ley*¹. Por el principio de diversidad de funciones, cada hombre contribuye al bien común de la sociedad política según sus capacidades y desde los distintos oficios, puestos y profesiones². Por el principio de autoridad, los ciudadanos deben obedecer sus dictados, por ser la autoridad un elemento necesario, postulado por la ley natural, para ordenar en la unidad social la pluralidad de componentes³.

El ciudadano es un ser libre que se une a otros seres libres. Por eso, la organización de la comunidad política debe asentarse en esa condición de libertad, de modo que contenga los cauces para el desarrollo libre de la persona. Aunque la libertad, dentro de un ente social como es la comunidad política, debe orientarse hacia el respeto a los demás y al cumplimiento de los fines propios de dicha comunidad⁴, *es regla primera y básica la del máximo posible de libertad: "Se debe ob-*

1 cfr. Juan XXIII, Enc. *Pacem in Terris*, n. 56; Pablo VI, Lit. Ap. *Octagesima adveniens*, n. 22.

2 cfr. Juan XXIII, Enc. *Pacem in Terris*, nn. 53 ss.

3 cfr. León XIII, Enc. *Diuturnum Illud*, 3. 7; Pablo VI, Lit. Ap. *Octagesima adveniens*, n. 46.

4 Cfr. Conc. Vaticano II, Decl. *Dignitatis humanae*, n. 7.

servar la regla de la entera libertad en la sociedad, según la cual debe reconocerse al hombre el máximo de libertad, y no debe restringirse sino cuando es necesario y en la medida en que lo sea”⁵. Como dijo Juan XXIII, la autoridad pública está destinada, por su propia naturaleza, a asegurar el bien común de la comunidad, cuyo deber principal es reconocer el ámbito justo de la libertad y salvaguardar sus derechos⁶.

Hablar de respeto a la libertad —o de la condición de libertad— del ciudadano implica que el Estado, no sólo no invada, sino que garantice, proteja y ayude, tanto aquello que corresponde a lo individual del hombre —sus derechos naturales en las esferas no sociales (libertad ideológica, libertad de las conciencias, libertad religiosa etc.)—, como lo que es propio de la sociabilidad humana distinta de la esfera de la comunidad política (matrimonio, familia, educación y cultura, etc.)⁷.

5 Cfr. Conc. Vaticano II, Decl. *Dignitatis humanae*, n. 7.

6 Cfr. Juan XXIII, Enc. *Pacem in Terris*, n. 104.

7 cfr. León XIII, Enc. *Rerum Novarum*, nn. 26, 35 y 38; Pío XI, Enc. *Quadragesimo Anno*, n. 79; Juan XXIII, Enc. *Mater et Magistra*, nn. 117, 151-152; Conc. Vaticano II, Decl. *Gravissimum Educationis*, n. 6; Const. *Gaudium et Spes*, nn. 65, 69, 71, 75, 84.

II. DERECHOS POLITICOS

El hombre se presenta ante el Estado como sujeto de derechos naturales; pero no todos esos derechos son, hablando con propiedad, derechos políticos. Aunque la terminología usada, tanto por los especialistas de ciencia política, como por el Magisterio de la Iglesia es variable, por *derechos políticos* hay que entender aquellos que corresponden al ciudadano en cuanto miembro de la comunidad política y en relación a su organización y desarrollo. De éstos se hablará aquí, aunque también se hará una alusión a derechos de otro tipo.

El derecho político más general es el de participar activamente en la vida de la comunidad política. Este derecho tiene muy diversas manifestaciones según la forma política que adopte el Estado.

En virtud del principio de participación (que no es propio tan sólo de una determinada forma de gobier-

no, sino de todas, por tratarse de un derecho connatural a la condición activa del ciudadano), *se poseen entre otros, los siguientes derechos*: a) La libertad de formarse la propia opinión sobre la vida política y manifestarla. b) El derecho de reunión y de asociación con dichos fines. c) En un régimen democrático, por la naturaleza misma de la democracia, todo ciudadano tiene derecho a participar, mediante elecciones, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, en el gobierno del país y poder ser elegible. d) Sea cual sea la forma política, el ciudadano tiene derecho a manifestar su propio parecer sobre los deberes y los sacrificios que le son impuestos y no debe estar obligado a obedecer sin haber sido escuchado; estos dos derechos del ciudadano hallan en la democracia su expresión natural ⁸. Se sobreentiende que, en lo referente a las cuestiones generales y comunes, estos derechos pueden satisfacerse por medio de representantes elegidos de modo que sean verdadera representación del pueblo. e) También con independencia de la forma política, los ciudadanos tienen el derecho de crear leyes en forma de costumbres y participar, mediante plebiscito y referendum, en las decisiones políticas (aunque el ejercicio de estos derechos, que siempre existen, depende de las circunstancias históricas y de las leyes fundamentales

8 Cfr. Pío XII, *Aloc. Benignitas et humanitas*, n. 14

aceptadas —aunque sea de modo implícito— por el pueblo).

Por ser la comunidad política expresión natural y necesaria de la sociabilidad humana, todo hombre tiene *derecho a la nacionalidad*, de la que no puede ser privado arbitrariamente. Y como ningún Estado debe su origen a la ley natural, sino a opciones y sucesos históricos, nadie está vinculado por ley natural a un Estado y por lo tanto tiene el derecho de cambiar de nacionalidad.

La soberanía territorial de los Estados no rompe la destinación universal de toda la tierra para todos los hombres. En consecuencia, toda persona tiene *derecho a circular libremente dentro y fuera de su país y a elegir lugar de residencia*.

En relación con la función del Estado de proteger los derechos de las personas, hacer justicia y, en caso de delito, castigar al culpable, todo hombre tiene derecho: 1o. al reconocimiento como persona (en sentido jurídico: sujeto de derechos y deberes); 2o. a ser oído por un órgano judicial con garantías de imparcialidad para la determinación de sus derechos y deberes; 3o. en caso de acusación, a la presunción de inocencia, a la defensa y al juicio imparcial; 4o. a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes y a no ser torturado; 5o. a la seguridad de su persona; 6o. a la libertad (no

ser sometido a servidumbre, esclavitud, trabajos forzados o situaciones similares, etc.).

*No abarcando el Estado a la persona en su totalidad —ni siquiera la totalidad de la dimensión social del hombre—, el ciudadano y todo ser humano tiene otros derechos o esferas de libertad ante el Estado, v. gr.: derecho a la elección de estado, derecho a la libertad de las conciencias, libertad religiosa, derecho de asociación y de reunión, derecho a la propiedad, libertad de enseñanza, etc.*⁹.

Los derechos de los ciudadanos no son absolutos ni ilimitados; como regla general, sus límites son: los derechos de los demás, la salud y la moral públicas y el orden público¹⁰.

9 cfr. para el conjunto de los derechos que se han indicado, los textos recogidos en el *Enchiridion Symbolorum* de Deizinger y en las diversas colecciones de encíclicas; particularmente las encíclicas *Pacem in Terris* y *Mater et Magistra* de Juan XXIII y los vols. del magisterio de Juan Pablo II: *Juan Pablo II y el orden social* Pamplona 1981, y *Juan Pablo II y los derechos humanos*, Pamplona 1982.

10 cfr. Conc. Vaticano II, Decl. *Dignitatis humanae*, n. 7.

III. DEBERES CIVICOS

El ciudadano, por ser corresponsable del bien común, tiene también un conjunto de deberes que se denominan deberes cívicos o también deberes políticos.

El deber más básico es el cumplimiento de las leyes, que constituye la obligación primordial de justicia legal o de derecho de la sociedad respecto de sus miembros. Es el deber de justicia primaria de los ciudadanos, porque las leyes marcan el orden en las relaciones sociales y la parte que a cada uno le corresponde en la obtención de los fines de la sociedad o bien común.

Tiene también los ciudadanos el *deber de prestaciones personales*, cuando lo exija el bien común y según lo marcado por las leyes o costumbres. Dentro de estas prestaciones, la más conocida es la de defender por las armas a la comunidad política en caso de agre-

sión externa. Junto a las prestaciones personales, existe también el deber de contribuir a los gastos del Estado mediante el *pago de los impuestos*; el fraude fiscal es contrario a la ley natural y, por tanto, pecado.

Asimismo los ciudadanos tienen el deber de *participar activamente en la vida pública*, en la medida de sus posibilidades y según las circunstancias, con un margen a la libertad personal.

Puede ser un deber perentorio e ineludible, cuando la no participación puede ocasionar daños al bien común (v. gr. acceso a las funciones públicas de personas con ideario contrario a la ley de Dios, imposibilidad de que desempeñen esas funciones otras personas, etc.). En una democracia, votar no sólo es un derecho, sino un deber; su omisión y su ejercicio no meditado o imprudente es una falta moral, que puede ser grave. El voto en blanco o la abstención, como forma de manifestar la voluntad en una elección (no por negligencia o desinterés) son perfectamente lícitos.

Los ciudadanos deben *obediencia, respeto y honor a las autoridades depositarias del poder estatal*. También en un régimen democrático, la legítima oposición no

deroga estos deberes, porque la autoridad —aunque la elección provenga del pueblo, como depositario inmediato de la soberanía nacional¹¹— es un derecho natural y, en último término, procede de Dios¹².

11 cfr. León XIII, Enc. *Au Milieu*, 21 y 22; Ep. *Notre Consolation*, 12 y 13.

12 cfr. Rom 13, 5; 1 Pt 2, 13; León XIII, Enc. *Rerum Novarum*, 26; Enc. *Immortale Dei*, 2 y 10; Pío XI, Enc. *Ubi Arcano*, 32; Pío XII, Enc. *Summi Pontificatus*, n. 71; Juan XXIII, Enc. *Pacem in Terris*, n. 51; Conc. Vaticano II, Decl. *Dignitatis humanae*, n. 11; Const. *Gaudium et Spes*, n. 74.

IV. LEGITIMIDAD E ILEGITIMIDAD DE LA AUTORIDAD POLITICA

La autoridad del Estado y de los gobernantes sólo obliga —porque sólo entonces existe realmente—, cuando es legítima, con legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Cuando falta la legitimidad de origen se habla de usurpación y usurpador; cuando hay ilegitimidad de ejercicio —mandatos injustos— se dice que hay extralimitación, tiranía, etc.

*Principio fundamental es el acatamiento práctico —no se habla de lo que en teoría parezca mejor— de la forma política establecida legítimamente. Aunque esta forma política es siempre obra humana, los ciudadanos tienen la obligación de aceptar los regímenes constituidos y no pueden sin justa causa intentar destruirlos o cambiar su forma*¹³. El fundamento de ese

13 León XIII, Enc. *Aumilieu*, 16 y 17.

deber es el bien común, pues cuando en una sociedad existe un poder constituido y actuante, el interés común se halla ligado a ese poder y por ello debe aceptársele tal cual existe ¹⁴. La Iglesia ha condenado enérgicamente el derecho de rebelión, que los primeros liberales atribuyeron al pueblo frente al poder legítimo ¹⁵.

Si se piensa que el bien común postula un cambio de forma de gobierno, en tanto exista la legitimidad de la forma establecida, no es posible actuar de otra manera que utilizando los medios legales para extender la conciencia de ese cambio entre el pueblo, de modo que se obtenga el consenso general y el cambio se produzca sin daño al bien común (v. gr. ganando las elecciones).

Lo mismo hay que decir respecto del cambio de gobierno, sin alterar la forma ni el régimen político; en la democracia está prevista esta posibilidad de cambio legal de gobierno mediante elecciones periódicas. Siendo consubstancial al régimen democrático la posibilidad de cambiar periódicamente de gobierno y siendo legal —e incluso deseada— la existencia de la oposición, sin embargo, el deber cívico de obediencia y respeto al gobierno establecido sigue incólume y, por

¹⁴ cfr. León XIII, Ep. *Notre consolation*, 11.

¹⁵ cfr. León XIII, Enc. *Immortale Dei*, 16; Pío XI, Ep. *Firmissimam constantiam*, 34 y 35.

lo tanto, existen leyes morales que regulan el ejercicio de la oposición, que no puede transformarse en rebeldía ni desacato.

Cuando la autoridad es ilegítima —detentada por un usurpador o en el caso de que exista daño grave al bien común por ineptitud, o por quebranto del derecho y la justicia (extralimitación, tiranía, etc.)—, no existe la obligación de acatar y respetar el poder constituido. Como las soluciones son múltiples, a continuación se hará referencia a algunos tipos posibles:

a) *Respecto al usurpador o al poder de origen ilegítimo.* El pueblo no debe obediencia a un usurpador y puede y debe combatirlo. Sin embargo, el bien común obliga a obedecer sus disposiciones —que no contengan en sí un acto moralmente ilícito o injusto— durante su dominio efectivo, en la medida en que lo exijan la seguridad y el orden públicos (lo mismo vale para los habitantes de un país ocupado durante una guerra). Un gobierno o una constitución ilegalmente introducidos pueden convertirse en legítimos con el tiempo, no por el hecho consumado, sino cuando el bien del Estado y del pueblo obliga a preservarlos de nuevas e inútiles crisis.

b) *Respecto del poder legítimo por origen pero ejercido ilegítimamente.* Esta situación se produce cuando se mandan actos iniustos o moralmente ilícitos. La

norma es clara: debe obedecerse a Dios antes que a los hombres (*Act* 5, 29); por esta causa millares de cristianos fueron mártires. A la desobediencia —justa ante los hombres y santa ante Dios— a los mandatos y leyes contrarias a la ley divina natural o positiva se le llama *resistencia pasiva*. Además de ésta, pueden y deben tomarse, en cuanto sea posible, las siguientes medidas: 1) el uso de todos los medios legales para evitar y rechazar los actos y situaciones contrarias a la ley natural; se puede por tanto recurrir a la palabra, al escrito y a las influencias políticas; 2) la legítima defensa personal, cuando se den sus requisitos.

V. LA VIOLENCIA POLITICA

Principio fundamental en las relaciones políticas es la *paz social*. La sociabilidad del hombre comporta solidaridad, amor — natural y sobrenatural — y cooperación entre los ciudadanos. Su regla es la ley, natural y positiva. Hay, pues, que rechazar los sistemas de relaciones políticas basados en la violencia y en el odio. El recurso a la violencia es siempre un fenómeno anormal — aunque en casos excepcionales sea lícito, como veremos — y crea o supone situaciones de injusticia. Las diferencias entre los ciudadanos en materia política deben resolverse por la *negociación*, la *tolerancia* y el *compromiso*.

La tolerancia es la permisión de un mal menor para evitar otro mayor. La tolerancia pide que se permitan las manifestaciones de una conciencia errónea y que se soporten para evitar males mayores. No es lícito tolerar aquellas manifestaciones de una conciencia

errónea que lesionan derechos y obligaciones irrenunciables de los demás. Se convierte en mala tolerancia cuando pasa a ser permisivo, esto es, cuando se quita toda importancia al orden objetivo de la verdad y el bien o se cae en el relativismo (nada sería bueno o malo objetivamente, sino tan sólo algunos opinarían que tal o cual cosa es buena y otros que es mala).

El compromiso es un acuerdo por el cual los que intervienen renuncian de manera total o parcial, permanente o transitoria, a imponer sus intereses o exigencias, sobre la base de una mutua comprensión. El deber del compromiso procede de la obligación de mantener la paz social y la cooperación de todos. No es lícito el compromiso cuando su objeto es moralmente ilícito.

Tanto *en el caso de la ilegitimidad de origen*¹⁶ —no legitimada—, como en el de la ilegitimidad de ejercicio (en este caso, cuando el ejercicio injusto y abusivo del poder adquiere notables proporciones) *caben la resistencia activa, el pronunciamiento y la revolución (entendida en sentido amplio)*. Su licitud se funda en el derecho del pueblo a la legítima defensa. La regla general que rige la posible licitud de estas acciones es la de que los males que estas acciones traen consigo

16 Ver. cap. IV. p. 25 inciso a).

sean inferiores al bien obtenido y que no se cometan injusticias y abusos ¹⁷. Al respecto deben recordarse las enseñanzas de Cristo sobre la mansedumbre y la fortaleza en saber soportar la injusticia. Y también que el poder constituido está protegido por la presunción de legitimidad y de justicia de sus leyes, de modo que debe haber pruebas seguras de lo contrario. Por otra parte, siendo opinables muchas de las soluciones políticas, la falta de acuerdo con las que tome el gobierno no genera el derecho a la resistencia, ya que las soluciones que adopte están amparadas por el derecho del gobernante; la autoridad existe, entre otras cosas, para que se adopte una solución determinada entre las múltiples, que obligue por razón del poder de elección y decisión que tiene el gobernante.

a) Por *resistencia activa* se entiende el empleo de medidas de fuerza dirigidas contra el gobierno para impedir las situaciones injustas: movilizaciones masivas, ocupaciones, movimientos clandestinos, enfrentamientos con la fuerza pública, concentraciones, etc. Dentro de estos medios de fuerza está la *huelga política*. En principio, la huelga política no es lícita, pues el derecho a la huelga — como todo derecho — se ciñe a su ámbito propio, que es el laboral; pero si se dan

17 cfr. Pío XI, Ep. *Firmissimam constantiam*, 34 a 36; Conc. Vaticano II. Decl. *Dignitatis humanae*, 11; Const. *Gaudium et Spes*, 74.

los requisitos de licitud de la resistencia activa, es un medio lícito para ella.

b) *El pronunciamiento* —que no debe confundirse con el golpe de Estado— es la rebelión o golpe de fuerza llevado a cabo por militares. Para que sea lícito no basta que sea manifestación de la voluntad de un grupo militar movido por causas razonables; debe ser realmente la única vía —o la menos dañosa— para eliminar una situación de grave opresión del pueblo.

c) *La revolución* en sentido estricto es el derrocamiento violento de un régimen o forma política legítimos por una parte del pueblo que intenta sustituir dichos sistemas por otros. Han postulado la revolución los liberales que sostenían que el pueblo puede derrocar por la fuerza a un sistema de gobierno a su arbitrio; posteriormente el recurso a la revolución lo han sostenido y generalizado los sistemas ideológicos marxistas que consideran la revolución como medio necesario para el cambio político. Antes se ha hablado de este punto y de la inmoralidad de la revolución. La paz forma parte del bien común y, por lo tanto, los medios normales para el progreso, la forma y el cambio políticos y sociales son los medios pacíficos.

Hay un *concepto amplio de revolución*, que es el derrocamiento violento de un sistema político injusto e ilegítimo por parte del pueblo. Será lícita cuando el

pueblo se encuentre en estado de legítima defensa o de extrema necesidad, siempre que haya razonables perspectivas de éxito, se cuente con el consejo de personas prudentes, y haya proporción entre los beneficios que se van a obtener y los males que la rebelión provoca.

En resumen, cuando los gobernantes, por ineptitud o tiranía, causan la ruina o el hundimiento del pueblo, éste puede usar su derecho a cambiar los gobernantes, usando la fuerza cuando resulta inviable o ineficaz el recurso a los medios pacíficos.

Otra forma de violencia política es el *golpe de Estado*, que hoy se confunde frecuentemente con el pronunciamiento (se habla v. gr. de “golpismo”, cuando en realidad de lo que se está hablando es del pronunciamiento). Por golpe de Estado se entiende la medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones del otro (el Ejército no es uno de esos poderes, sino el brazo armado del Estado). Dichos poderes son el legislativo —Parlamento o Cortes—, ejecutivo —el Gobierno— y judicial —jueces y Tribunales—. Por eso se llama golpe de Estado; v. gr. el de Napoleón, primer Cónsul, cambiando la forma republicana por la imperial, o la del Partido Comunista en Checoslovaquia. Por golpe de Estado, los gobernantes —generalmente el máximo dignatario o alguno de los principales del poder eje-

cutivo, o bien el Parlamento, o bien el partido político en el poder o alguno de los que están en él — pretenden conservar o aumentar su poder o modificar la estructura constitucional o el sistema de gobierno. Al golpe de Estado son asimilables las llamadas “revoluciones de Palacio”. De suyo, el golpe de Estado, como forma violenta que es y por ir contra el sistema o gobierno establecidos es ilícito. Puede ser lícito en las circunstancias señaladas y de acuerdo con las reglas indicadas.

VI. ALGUNOS TEXTOS DEL MAGISTERIO ECLESIASTICO

1. Naturaleza social del hombre y comunidad política

“Dios destinó también al hombre para vivir en la sociedad civil, exigida por su propia naturaleza. En el plan del Creador, la sociedad es un medio natural que el hombre puede y debe usar para obtener su fin, pues la sociedad humana es para el hombre y no al contrario” (*Pío XI, Enc. Divini Redemptoris, n. 29*).

“La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Porque el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social. La vida social no es, pues, para

el hombre sobrecarga accidental” (*Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et Spes, n. 25*).

“Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la comunidad civil son conscientes de su propia insuficiencia para lograr una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comunidad más amplia, en la cual todos conjuguen a diario sus energías en orden a una mejor procuración del bien común. Por ello forman comunidad política según tipos institucionales varios. La comunidad política nace, pues, para buscar el bien común, en el que encuentra su justificación plena y su sentido y del que deriva su legitimidad primigenia y propia” (*Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et Spes, n. 74*).

2. Igualdad y diversidad de funciones

“La igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor. Porque todos ellos, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen” (*Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et Spes, n. 29*).

“Todos los miembros de la comunidad deben participar en el bien común por razón de su propia naturaleza, aunque en grados diversos, según las

categorías, méritos y condiciones de cada ciudadano” (*Juan XXIII, Enc. Pacem in Terris, n. 55*).

“Cualesquiera que sean las vicisitudes en las distintas formas de gobierno, siempre existirán en el estado de los ciudadanos aquellas diferencias sin las cuales no pueden existir ni concebirse sociedad alguna. Es absolutamente necesario que haya quienes se dediquen a las funciones de gobierno, quienes legislen, quienes juzguen y, finalmente, quienes con su dictamen y autoridad administren los asuntos civiles y militares” (*León XIII, Enc. Rerum Novarum, 25: AL, 11, 122*).

3. Autoridad

“No puede existir ni concebirse una sociedad en la que no haya alguien que rija y una las voluntades de cada individuo, para que de muchos se haga una unidad y las impulse dentro de un recto orden hacia el bien común. Dios ha querido, por tanto, que en la sociedad civil haya quienes gobiernen a la multitud” (*León XIII, Enc. Diuturnum Illud, n. 7: AL 2, 274*).

“Es, pues, evidente que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana, y, por lo mismo, pertenecen al orden previsto por Dios, aún cuando la determinación del régimen político y la designación de los gobernantes se dejen a la

libre voluntad de los ciudadanos” (*Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et Spes, n. 74*).

“La autoridad, sin embargo, no pueden considerarse exenta de cometimiento a otra superior. Más aún, la autoridad consiste en la facultad de mandar según la recta razón. Por ello, se sigue evidentemente que su fuerza obligatoria procede del orden moral, que tiene a Dios como primer principio y último fin” (*Juan XXIII, Enc. Pacem in Terris, n. 47*).

“El mismo orden absoluto de los seres y de los fines, que muestra al hombre como persona autónoma, es decir, como sujeto de deberes y derechos inviolables, raíz y término de su propia vida social, abarca también al Estado como sociedad necesaria, revestida de autoridad, sin la cual no podría existir ni vivir. Si los hombres, valiéndose de su libertad personal, negaran toda dependencia de una autoridad superior dotada con el derecho de coacción, socavarían con esta desobediencia el fundamento de su propia dignidad y libertad, es decir, aquel orden absoluto de los seres y de los fines” (*Juan XXIII, Enc. Pacem in Terris, n. 46*).

4. El principio de máxima libertad

“Se debe observar la regla de la entera libertad en la sociedad, según la cual debe reconocerse al hombre el máximo de libertad, y no debe restringirse, sino

cuando sea necesario y en la medida en que lo sea” (*Conc. Vaticano II, Decl. Dignitatis humanae, n. 7*).

“La libertad se vigoriza cuando el hombre acepta las inevitables obligaciones de la vida social, toma sobre sí las multiformes exigencias de la convivencia humana y se obliga al servicio de la comunidad en que vive” (*Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et Spes, n. 31*).

“No es justo que el individuo y la familia sean absorbidos por el Estado; lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible, sin daño del bien común y sin injuria de nadie. No obstante, los que gobiernan deberán atender a la defensa de la comunidad y de sus miembros” (*León XIII, Enc. Rerum Novarum, n. 26*): *AL 11, 123*).

“A veces, hasta el derecho mismo a la libertad se somete a discusión o incluso queda totalmente suprimido. Cuando esto sucede, todo el recto orden de la sociedad civil se subvierte; porque la autoridad pública está destinada, por su propia naturaleza, a asegurar el bien de la comunidad, cuyo deber principal es reconocer el ámbito justo de la libertad y salvaguardar santamente sus derechos” (*Juan XXIII, Enc. Pacem in Terris, n. 104*).

5. *Derechos civiles y políticos*

“La garantía de los derechos de las personas es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública” (*Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et Spes, n. 73*).

“Es una exigencia cierta de la dignidad humana que los hombres puedan con pleno derecho dedicarse a la vida pública, si bien sólo pueden participar en ella ajustándose a las modalidades que concuerden con la situación real de la comunidad política a la que pertenecen” (*Juan XXIII, Enc. Pacem in Terris, n. 73*).

“La conciencia más viva de la dignidad humana ha hecho que en diversas regiones del mundo surja el propósito de establecer un orden político-jurídico que proteja mejor en la vida pública los derechos de la persona, como son el derecho de libre reunión, de libre asociación, de expresar las propias opiniones y de profesar privada y públicamente la Religión” (*Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et Spes, n. 73*).

“Además, hay ciertos derechos y libertades del individuo —de cada individuo— o de la familia, que el Estado debe siempre proteger y que nunca puede violar o sacrificar a un pretendido bien común. Nos referimos; para citar sólo algunos ejemplos, al derecho

al honor y a la buena reputación, al derecho a la libertad de venerar al verdadero Dios, al derecho originario de los padres sobre sus hijos y su educación” (*Pío XII, Disc. A vous messieurs, n. 6*).

“A la persona humana le corresponde también la defensa legítima de sus propios derechos: defensa eficaz, igual para todos y regida por las normas objetivas de la justicia” (*Juan XXII, Enc. Pacem in Terris, n. 27*).

“Ha de respetarse íntegramente también el derecho de cada hombre a conservar o cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del país; más aún, es necesario que le sea lícito, cuando lo aconsejan justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí su domicilio” (*Juan XXIII, Enc. Pacem in Terris, n. 25*).

“En el uso de todas las libertades hay que observar el principio moral de la responsabilidad personal y social. Todos los hombres y grupos sociales, en el ejercicio de sus derechos, están obligados por la ley moral a tener en cuenta los derechos ajenos y sus deberes para con los demás y para con el bien común de todos” (*Conc. Vaticano II, Decl. Dignitatis humanae, n. 7*).

6. Deberes cívicos y cumplimiento de las leyes

“Una convivencia bien organizada exige que se reconozcan y se respeten los derechos y deberes mutuos. De aquí se sigue que cada uno debe adoptar genero-

samente su colaboración para crear un orden colectivo ciudadano, en el que tanto los deberes como los deberes se ejerciten cada vez con la mayor diligencia y utilidad” (*Juan XXIII, Enc. Pacem in Terris, n. 31*).

“La ley natural y la ley cristiana mandan reverenciar a los que dentro de su competencia rigen en el Estado, y obedecer la legislación justa de los que gobiernan” (*León XIII, Enc. Graves de Communi. n. 8: AL 21, 8-9*).

“Un hombre penetrado de ideas rectas sobre el Estado y sobre la autoridad y el poder de que está revestido como custodio del orden social, nunca jamás pensará ofender la majestad de la ley positiva dentro del campo de su natural competencia. Pero esta majestad del derecho positivo humano es inapelable únicamente cuando este derecho se conforma —o al menos no se opone— al orden absoluto establecido por el Creador e iluminado con una nueva luz por la revelación del Evangelio” (*Pío XII, Alloc. Benignitas et Humanitas, n. 30: AAS 37, (1945) 17*).

“Entre estos últimos (deberes cívicos), es necesario mencionar el deber de aportar a la vida pública el concurso material y personal requerido por el bien común” (*Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et Spes, n. 75*).

“Los ciudadanos, que deben ser defendidos en sus derechos, deben al mismo tiempo ser educados para

tomar su justa parte en las cargas públicas, en forma de tasas o de impuestos, ya que ésta es también una forma de justicia, cuando se benefician de los servicios públicos y de las múltiples condiciones de la vida apacible en común” (*Juan Pablo II, Alocución a un grupo de fiscales, 7-XI-80*).

“Quienes, al servicio de la patria, se hallan en el ejército, considérense instrumentos de la seguridad y de la libertad de los pueblos, pues desempeñando bien esta función contribuyen realmente a estabilizar la paz” (*Conc. Vaticano II, Cons. Gaudium et Spes, n. 79*).

“Parece razonable que las leyes tengan en cuenta, con sentido humano, el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivo de conciencia y aceptan al mismo tiempo servir a la comunidad de otra forma” (*Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et Spes, n. 79*).

“Recuerden todos los ciudadanos el derecho y al mismo tiempo el deber que tienen de votar con libertad para promover el bien común” (*Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et Spes, n. 75*).

7. Acatamiento del poder legítimo y autoridad legítima

“El bien común de la sociedad es superior a cualquier otro interés, porque es el principio creador, es el elemento conservador de la sociedad humana, de

lo cual se sigue que todo verdadero ciudadano debe querer el bien común y procurarlo a toda costa... Por consiguiente, cuando en una sociedad existe un poder constituido y actuante, el interés común se halla ligado a este poder, y por esta razón debe aceptarse este poder tal cual existe” (*León XIII, Ep. Notre consolation, n. 11: AL 12, 111*).

“Estos cambios están lejos de ser siempre legítimos en el origen; es incluso difícil que lo sean. Sin embargo, el criterio supremo del bien común y de la tranquilidad pública impone la aceptación de estos nuevos gobiernos establecidos de hecho sustituyendo a los gobiernos anteriores que de hecho ya no existen” (*León XIII, Ep. Notre consolation, n. 15: AL 12, 112*).

“Juzgamos innecesario advertir que todos y cada uno de los ciudadanos tienen la obligación de aceptar los regímenes constituidos y que no pueden intentar nada para destruirlos. De aquí procede que la Iglesia... haya reprobado siempre las doctrinas y haya condenado siempre a los hombre rebeldes a la autoridad legítima. Actitud observada por la Iglesia incluso en tiempos en que los gobernantes abusaban del poder recibido” (*León XIII, Enc. Au milieu, n. 17: AL 12, 26*).

“Cuando no existe el derecho de mandar, o se manda algo contrario a la razón, a la ley eterna, a la au-

toridad de Dios, es justo entonces desobedecer a los hombres para obedecer a Dios” (*León XIII, Enc. Libertas, n. 10: AL 8, 223-224*).

“El derecho de mandar constituye una exigencia de orden espiritual y dimana de Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese orden espiritual y, por consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulgada ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano, ya que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (*Juan XIII, Enc. Pacem in Terris, n. 51*).

“Cuando la autoridad pública, rebasando sus competencias, oprime a los ciudadanos, éstos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común; les es lícito, sin embargo, defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y la ley evangélica” (*Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et Spes, n. 74*).

“Los apóstoles, como el Maestro, reconocieron la legítima autoridad civil,... pero al mismo tiempo no tuvieron miedo a contradecir al poder público cuando éste se oponía a la santa voluntad de Dios: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Act. 5.29). Este es el camino que siguieron innumerables márti-

res y fieles en todo tiempo y en todo lugar” (*Conc. Vaticano II, Decl. Dignitatis humanae, n. 11*).

8. *Violencia política y paz social*

“Vosotros habéis recordado a vuestros hijos más de una vez que la Iglesia fomenta la paz y el orden aún a costa de graves sacrificios, y que se condena toda insurrección violenta, que sea injusta, contra los poderes constituidos. Por otra parte, también vosotros habéis afirmado que, cuando llegara el caso de que esos poderes constituidos se levantasen contra la justicia y la verdad hasta destruir los fundamentos mismos de la autoridad, no se ve como se podría entonces condenar el que los ciudadanos se unieron para defender la nación y defenderse a sí mismo con medios lícitos y apropiados contra los que se valen del poder público para arrastrarla a la ruina” (*Pío XI, Ep. Firmissimam constantiam, nn. 34-36: AAS (1937) 196*).

“Sin embargo, como es sabido, la insurrección revolucionaria —salvo en el caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de las personas y dañase peligrosamente el bien común del país— engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor” (*Pablo VI, Enc. Populorum Progressio, nn. 30-31*).

“Las relaciones de fuerza no han logrado jamás establecer efectivamente la justicia de manera durable y verdadera, por más que en algún momento la alternancia de las posiciones pueda permitir con frecuencia hallar condiciones más fáciles de diálogo. El uso de la fuerza suscita, por lo demás, la puesta en marcha de fuerzas contrarias y de aquí el clima de lucha que da lugar a situaciones extremas de violencia y de abusos” (*Pablo VI, Lit. Ap. Octogesima adveniens, n. 43*).

“Al ser la tolerancia del mal un postulado propio de la prudencia política, debe quedar estrictamente circunscrito a los límites requeridos por la razón de esa tolerancia, esto es, el bien público. Por este motivo, si la tolerancia daña al bien público o causa al Estado mayores males, la consecuencia es su ilicitud, porque en tales circunstancias la tolerancia deja de ser un bien” (*León XIII, Enc. Libertas, n. 23: AL, 8, 240*).